

C. El Equipo de Abogados*

* Por Verónica Tomé.

I. Introducción

Hablamos en éste capítulo del “fenómeno legal”¹, analizando al conjunto de abogados que trabajan en la Dirección General de Políticas de Género (DGPG) dependientes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, específicamente dentro de los Equipos Interdisciplinarios de las Comisarías de la Mujer y la Familia de Ezeiza, La Matanza, Malvinas Argentinas y San Martín de la provincia de buenos Aires.

Este desarrollo se basa fundamentalmente en las entrevistas llevadas a cabo a cada uno de los abogados de las comisarías mencionadas en base a un cuestionario especialmente diseñado en función de su tarea y profesión específicas. Estas entrevistas individuales se complementan con la observación directa en las comisarías y el análisis de los datos aportados por la DGPG.

a. Breve caracterización de los abogados. Violencia familiar. Perspectiva de género.

Los abogados participantes de los EI de las cuatro comisarías de la Mujer y la Familia relevadas en éste trabajo, son todos varones, policías, con un promedio de 15 años de antigüedad en la Policía de la provincia de Buenos Aires, de un año en los EI de las CMF y con altos rangos -en su mayoría capitanes -.

Desarrollaron su carrera de abogacía siendo policías. Han realizado en su mayoría especializaciones en Derecho de Familia, procesal civil, algunos mencionaron procesal penal. No se mencionó especialización alguna en derecho Penal, Criminología, Administrativo, etc. Sí hay un gran desarrollo del derecho procesal penal que se vincula especialmente con la práctica legal cotidiana. En algún caso se destacó especialmente la participación en cursos y vinculación con asociaciones de derecho procesal penal.

En cuanto al marco legal aplicado a la temática de las Comisarías de la Mujer y la Familia, en su mayoría mencionan la aplicación de la ley de violencia familiar de la provincia de Buenos Aires, ley 12569. Los entrevistados se inclinaron por afirmar que, complementariamente, poseen un buen manejo del Código Civil en temas específicos de familia y menores.

En cuanto a la aplicación de la ley de violencia familiar, es de notarse que la interpretación que de ella hace el conjunto de los abogados está regida por los principios generales del derecho civil, especialmente por el Derecho de Familia. No se han mencionado cursos específicos sobre la ley de violencia familiar, su contexto histórico, ni cursos universitarios de postgrado que se vinculen a la problemática de la violencia familiar.

¹ “fenómeno legal” por cuanto está constituido por tres componentes que son el formal-normativo (se involucra la norma legalmente promulgada), el estructural (en el que tenemos instituciones como la policía que posee prácticas equiparables a leyes no escritas) y el politico-cultural (que sería el contenido que la gente le da a la ley, las costumbres que tambien involucran leyes no escritas). Estos componentes se influyen, limitan o definen entre sí. Alda Facio, “Metodología para el análisis de género del fenómeno legal” en Género y Derecho. Lom Ediciones/La Morada. 1999. Santiago de Chile.

En cuanto a los instrumentos internacionales especiales en la materia, todos los abogados mencionaron tenerlos en cuenta pero a excepción de uno de los entrevistados que mostró dominio del tema, el resto no conoce los textos internacionales. De las convenciones internacionales vinculadas al tema solo se menciona reiteradamente, la Convención de los Derechos del Niño –en la parte específica referida a la protección de derecho- pero no se mencionó la convención específica sobre violencia -Belem do Pará- ni la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer -CEDAW-. Tampoco se mencionaron como documentos relevantes las recomendaciones de los distintos Comités internacionales ni otros informes como los de la OMS.

En general se identifica género con sexo en el texto legal. Esto dificulta el abordaje de casos desde una perspectiva de género en el sentido establecido en el protocolo de atención, donde se reconoce como punto fundamental de análisis la situación de poder y dominación de las relaciones en la familia.

Observaciones: Se observa cierta tendencia a especializarse en derecho penal y procesal penal. Esto se vincula con la idea de reforzar los espacios de autoridad derivada de la materia del derecho penal. La idea de autoridad mencionada tiene doble impacto: en la atención de casos y en las relaciones intra institucionales -dentro del EI y de las CMyF-. En la atención de casos podría ocurrir que se utilizara ciertos estereotipos contrarios a la percepción de género, ya derogados por las leyes penales – por ej: “mujer/niña honesta”, “mujer adúltera” –, que son percibidos por las víctimas/sobrevivientes como parte de la carga cultural que les impide acceder a la justicia. A nivel intra-institucional se basan las relaciones en una supuesta autoridad legitimada, se equipara el comportamiento individual al poder coercitivo legitimado del derecho penal. Ambos componentes son totalmente válidos por sí mismos. Pero ambos, dada su naturaleza, deben ser constantemente limitados y utilizados extremando los recaudos, como en el derecho penal en general.- No es recomendable basar la atención de la violencia contra las mujeres ó la violencia familiar en una relación legal de autoridad. Aquí se observa claramente como la esfera Estructural –autoridad de los abogados policías, mandato de disponer- modifica la formal normativa -ley de violencia familiar y protocolo de Organización y funcionamiento de los EI- de este fenómeno legal.

Como contrapartida es recomendable la ampliación de conocimientos legales de instrumentos internacionales que son abarcativos de más ramas del derecho, y por tanto de otros principios rectores. Muchos de estos documentos internacionales, - además de reconocer un sujeto pasivo bien definido- contienen en sí definiciones y obligaciones asumidas por el Estado vinculados directamente a la perspectiva jurídica de género. De este modo se reconocería como principales afectadas por la violencia de género a las mujeres, niñas, y ancianas. En ellos se describe un objetivo jurídico bien claro: protección y respeto de los derechos por parte de todos y un seguro ejercicio de derechos por parte de las/os afectados. Baste solo como ejemplo una posible interpretación de la ley de violencia familiar desde la perspectiva de los derechos internacionales: La aplicación de la Convención de Belem do Pará permitiría afirmar que las medidas preventivas que contienen la ley tienen carácter “cautelar” y no “autosatisfactivas”, puesto que las víctimas/sobrevivientes no quedarían adecuadamente protegidas con su

sola aplicación ni han logrado con ello una sentencia y una sanción adecuadas. Esto obligaría a los abogados, por ejemplo, a pensar en una forma de resarcimiento económico para las sobrevivientes ó en una forma de sanción para el victimario, aún en el marco de la ley de violencia familiar, quizás por aplicación de la analogía –trabajos comunitarios, etc.-.

Por otro lado, sería importante reforzar las lecturas legales con especial orientación en la terminología utilizada y su validez en ese marco. Por ejemplo: “familia”. ¿Cuántos tipos de familia se reconocen a nivel internacional en la actualidad?, ¿Sus características y definición? ¿Se tienen en cuenta las relaciones únicamente heterosexuales? ¿Qué es la paternidad responsable? ¿Qué implica un criterio de equidad en el marco familiar?, etc.

b. Su trabajo

1. Horarios y tareas en general

Los abogados del equipo interdisciplinario tienen una carga horaria semanal que distribuyen por día conforme son las necesidades de la comisaría de la mujer y la familia. Permanecen en la Comisaría por espacios acotados de tiempo, pero no concurren todos los días.

“para llegar por ahí si tengo un horario, pero para irme puedo irme mas temprano del horario .. o mas tarde. Desde lo profesional la Dirección General nos respeta mucho el tema de la función, porque nosotros tenemos una matrícula que también tenemos que pagar y debemos cumplir con un trabajo profesional... en ese sentido no hay problema”

Para ser asesoradas las víctimas/ sobrevivientes deben asistir los días que el abogado está trabajando en la comisaría. No se observó coordinación con el resto del equipo interdisciplinario para organizar los espacios de trabajo y de atención a las víctimas/sobrevivientes. Dicen que para dar celeridad a la atención de la gente que está en la guardia, muchas veces hacen las entrevistas solos. Las víctimas pueden tener entre dos a tres horas de espera.

Los abogados consideran que su tarea específica dentro del EI es el “asesoramiento”. Este asesoramiento se desarrollada hacia el interior de la comisaría, es decir al personal policial, y hacia el exterior, o sea a las víctimas/sobrevivientes. A estas últimas las asesoran especialmente sobre sus derechos, les indican los “pasos a seguir” y les “recomiendan” que deben hacer legalmente.

Advierten mucha necesidad de ordenar las estructuras familiares (divorcios, alimentos, régimen de visitas, etc.) y muchas situaciones legales “paralelas” (ej: un varón cabeza de dos familias simultáneamente, etc.).

Como otra tarea bien identificada, está la de “contener” a las víctimas/sobrevivientes, cosa que en general delegan en las/os psicólogas/os del equipo quienes están especializadas en ello.

Observaciones: Las mujeres en general –la gran mayoría, como ya dijimos, de las víctimas de la violencia familiar- tienen serios impedimentos para concurrir a la comisaría en horarios hábiles. Un repaso de las realidades locales permiten afirmar que son las responsables de las tareas del hogar, los niños y la administración en general de la vivienda. Esta falta de disponibilidad de horarios impide la realización de consultas legales cuando aún no se ha expresado fuertemente la violencia con lo que se impide la prevención de la violencia intrafamiliar. En horarios inhábiles es mas complejo, además, el transporte.

2. Espacios, recursos y técnica disponible.

La infraestructura de las Comisarías de la Mujer y la familia presenta como problema mas grave la falta de privacidad para las entrevistas, la falta de espacio pensados para los niños que acompañan a las mujeres que denuncian y la falta de un lugar para el trabajo en conjunto del equipo interdisciplinario. Consideran los abogados que pese a estas faltas, no obstante, están en mejores condiciones que otras oficinas dentro del Ministerio de Seguridad y dentro de la estructura de gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Consideran que sería bueno tener mas insumos para ofrecer una mejor atención a las víctimas y un mejor servicio como abogados. Por ejemplo la falta de línea telefónica obstaculiza grandemente la comunicación con los tribunales de familia, etc. a los fines de coordinar tareas de seguimiento u otras.

Disponen de pocos elementos técnicos lo que complejiza el abordaje. La centralización de datos, la utilización de programas que realicen cruces de información, etc. resultarían de suma utilidad para el trabajo en equipo.

Observaciones: En éste punto es importante resaltar la sensibilidad de los abogados a las necesidades de intimidad en las entrevistas y de espacios específicos para niñas/os en cuanto a la recreación y contención. Superan aquí el concepto de víctima-objeto al dar un espacio de atención pensado desde la necesidad de comodidad y privacidad de quien concurre a la Comisaría.

II. Percepción de los abogados

a. Sobre el Equipo Interdisciplinario

1. Su ubicación frente al resto del equipo.

El EI está formado por profesionales abogados, psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos y asistentes sociales. Los abogados manifiestan mantener una relación de igualdad con las demás profesionales de las otras disciplinas. Muchos de ellos asumen roles de coordinadores del EI y se sitúan en una posición de decisión y dirección de los EI. No hay mujeres que se desempeñen como abogadas contratadas integrantes del EI.

“...nosotros por ejemplo los jueves esta casi todo el EI, entonces traté.. o tratamos de pactar ...”

Intentan dar un abordaje interdisciplinario pero se sitúan frente a la experiencia de gabinete con cierta curiosidad, sorpresa y asombro por las perspectivas y miradas distintas que traen otras disciplinas. Todavía no se practica una integración total de las disciplinas que componen el Equipo Interdisciplinario. Buscan fundamentalmente el apoyo de las demás disciplinas (psicología y trabajo social) para los aspectos de contención de las víctimas, parcializando de éste modo el pleno aporte de que cada profesional es capaz.

Observaciones: La posición de los abogados dentro del EI es de dominación – salvo excepciones- inicialmente por el hecho exclusivo de su profesión. El derecho es, por su esencia, el lenguaje autorizado del Estado². El derecho refleja la cultura dominante. Por ende, una abogada/o en cualquier ámbito, estará basada/o en una autoridad de discurso determinante de su situación y actuación que otros profesionales no tendrán. A la profesión se suman otras características de los abogados del EI que reafirman su lugar de dominación: son varones, policías -alto rango y con mucha antigüedad- y en general, de mas edad que sus colegas.

Sería interesante la incorporación de abogadas y que la coordinación dentro del EI dependa –como ocurre ya en alguna comisaría- de profesionales distintos a los del derecho, o que sean mas jóvenes.

Uno de los aspectos a tener en cuenta de los abogados dentro del EI, es que poseen los conocimientos necesarios para acceder a las herramientas que permiten el ingreso e intercambio con las instituciones en general, especialmente administrativas –secretarías de desarrollo social- como de justicia –asesorías, etc-. En esto podrían posicionarse como las personas adecuadas para establecer relaciones con esas instituciones externas a la CMYF y para monitorear los ingresos/egresos ó aceptaciones de derivaciones en general, con un estudio de la incorporación y los posibles motivos de rechazo. Con el objetivo último de evitar

² El derecho como micro y macrodiscurso es entendido como el lenguaje autorizado del Estado y por ende como un discurso impregnado con el poder del Estado. Alda Facio (idem anterior)

que las víctimas /sobrevivientes se vean nuevamente enfrentadas a las circunstancias de violencia institucional.

1.2. Dinámica de trabajo. Coordinación. Reunión semanal

En general los horarios que poseen los abogados no coinciden siempre con los demás profesionales del EI. En los casos en que todo el EI se reúne en pleno en la Comisaría suele ocurrir que el exceso de víctimas a atender y la limitación del espacio físico impidan que se desarrolle la tarea en forma de gabinete tal y como lo ordena el protocolo de Organización y funcionamiento de los EI.

Los abogados, entonces, atienden solos a las víctimas tomando notas de ello y completando los formularios que forman parte de los anexos de los protocolos. Dicen intercambiar información con los demás integrantes del EI. Salvo la experiencia de Ezeiza y La Matanza, no se realizan reuniones periódicas de la totalidad de los participantes del EI de modo que no existe coordinación en sus trabajos al abordar a las víctimas.

1.3. Diagnóstico situacional. Informes de trabajo, síntesis de acciones, informe testigo de caso

El registro que se realiza de la atención brindada es errático y excepcional. Son anotaciones precarias que en modo alguno se toman en base a criterios unificados. Frente a la imposibilidad de atender a las víctimas en forma simultánea del EI, no se ha coordinado quien atenderá las entrevistas, las que se realizan aleatoriamente. No existe un registro único de las víctimas entrevistadas por el EI. Cada profesional puede haber atendido a una víctima de violencia familiar sin conocer si los demás la han atendido también. De este modo resulta claro que las distintas miradas profesionales no se “complementan” en la atención que actualmente se les da a las víctimas de violencia familiar. Puede ocurrir que identifiquen un caso especial y que intercambien sobre el con el resto del EI.

Frente a esta situación, es de suma importancia esclarecer los procesos de intervención del EI, profundizando sobre la Entrevista de Admisión Unica que prevé el protocolo (Ver sección A), con cuyo cumplimiento se evitaría la multiplicidad de preguntas a las víctimas por parte de cada profesional y se permitiría un punto de partida único para el abordaje del caso por parte del EI. En general esta entrevista de Admisión Unica no se completa en su totalidad, manifestando que al ser tan extensa se transforma en un límite en el desarrollo de la entrevista.

Tampoco existe la práctica de realizar un Diagnóstico Situacional de la víctima. No se realizan informes conjuntos del EI sobre los casos que abordan. Se manifiesta que al ser cada caso particular es tratado de acuerdo a las necesidades que plantea pero no se realiza de ello un informe aunque fuese mínimo, de las necesidades apuntadas y de las recomendaciones adecuadas al caso. Esta falta de toma de datos impide un desarrollo escrito del caso.

Salvo excepciones, estamos ante la ausencia de “informes de trabajo”, “síntesis de acciones” y el estudio de “informe testigo de caso” que propone el protocolo de Organización y funcionamiento de los Equipos Interdisciplinarios. En este sentido, la tarea particular de los abogados estaría destinada a perfeccionar la toma de la denuncia. Las recomendaciones podrían dirigirse a los contenidos mas adecuados en las actas de denuncia, el análisis de términos jurídicos que luego podrían ser mejor aplicados y la guarda del principio de utilidad procesal. De este modo en las denuncia estarían debidamente utilizados los términos de la ley de violencia familiar y bien solicitadas las medidas cautelares, con la incorporación en ese mismo acto de todos los requisitos formales que la jurisprudencia de la zona considere indispensables.

La ausencia de estos informes, síntesis y estudios de caso testigo, muchas veces provoca que las víctimas deban volver a las comisarías por que una denuncia no contenía algún requisito ó porque no estaba adecuadamente explicada su solicitud

Observaciones: A pesar de la oposición que pueda provocar la tarea de implementar el instrumento de Entrevista de Admisión Única ó la realización de un Informe de Diagnóstico Situacional para evaluar los factores de riesgo y/o evolución de los casos, es de suma importancia su cumplimiento que se vincula con una buena gestión de la tarea del EI en cada caso en particular. En forma simultánea se brindaría información a la Dirección General de Políticas de Género que permitirían el desarrollo de conocimiento para la futura aplicación de políticas públicas eficaces.

También se reforzaría el vínculo entre EI y la DGPG haciéndose presente uno en otro a través de éste intercambio de información. De este modo el componente estructural podría influir la toma de decisiones de la DGPG – componente formal-. La visibilidad de la DGPG se proyectaría sobre las Comisarías de la Mujer y la Familia las que se verían beneficiadas por la implementación de políticas de género reales y eficaces con base en datos objetivos y concernientes a cada comisaría en particular.

1.4. Organización y operación de las redes sociales de contención.

En cuanto a la Organización y operación de las redes sociales de contención la mayoría de los abogados manifiesta que no existen organizaciones no gubernamentales con quienes desarrollar esta tarea. La mayoría de las organizaciones con quienes sí se vinculan dependen del estado, pero no funcionan en red. Especialmente, por su profesión y su misión dentro del EI, entablan comunicación con las asesorías jurídicas gratuitas, defensorías oficiales, juzgados de menores, etc.

También se mencionó como un impedimento para la coordinación de éstas redes sociales, la falta de tiempo y de contactos institucionales.

Observaciones: En tal sentido se observa que sería mas conveniente que estas redes ya estuviesen coordinadas por agentes institucionalmente distintos a los participantes del EI como a la jefa de la Comisarías. Si esta coordinación ya existiese, el EI podría disponer de la totalidad de su tiempo en la atención de las

víctimas/sobrevivientes y en la organización del resto de las tareas del del EI. De este modo se reforzaría tanto la independiencia regional de las Comisarías de la mujer y la familia como su visibilidad ante la comunidad.

Es de suma importancia reforzar los lazos con las redes sociales, sean estas de Ongs ó de Ogs. componentes del espacio Político-cultural. Tanto el ámbito estructural como el Político-cultural tienen influencia entre sí. La dinámica de proyección de uno sobre el otro de modo de hacer permeables las experiencias que cada componente posea, enriquece la perspectiva con que se enfrenta la temática. El componente estructural se enriquecería con la incorporación de nuevas costumbres e interpretaciones derivadas del ejercicio político y de la cultura de la sociedad y por el contrario, los impulsos sociales y culturales encontrarían un cauce estructural.

Las instituciones se refuerzan con éste ejercicio puesto que su autoridad ya no estaría basada únicamente en la ley sino en su aceptación social y en su reconocimiento como ámbito adecuado para evacuar esas necesidades relacionadas con la violencia familiar y contra la mujer.

b. Sobre el Personal policial/ titular de la Cría.

1. Descripción de ambos según su percepción.

La mayoría de los abogados manifestó tener una buena comunicación con el personal policial. También manifestaron tener un trato cordial y no haber inconvenientes ó interrupciones cuando están realizando su tarea de entrevistas. Dijeron que ambos –tanto personal policial como abogados- se apoyan mutuamente.

Manifestaron en su mayoría los abogados, que en caso de ser necesario asesoran a la jefa de la comisaría en lo que les sea requerido. Sin embargo este asesoramiento no es necesario puesto que el trabajo es bien desempeñado. Al observarse las comisarías resultó que no hay intercambio entre las jefas de la comisaría y los abogados en lo atinente a los casos, las denuncias, etc. Hay mas intercambio con el resto del personal policial.

Por las atribuciones que tienen los abogados, no pueden inmiscuirse en forma determinante en el trabajo que realizan las oficiales de la comisaría de la Mujer y la Familia. Recordemos que el personal policial depende de la Jefatura General del Ministerio y el EI depende directamente de la DGPG. No obstante pueden colaborar y recomendar sobre la mejor forma de cumplir las tareas conforme su conocimiento jurídico. En la realización de tareas específicas de las oficinas de guardia ó judiciales de las comisarías el EI no tiene injerencia.

Lo que se ha observado es que hay información mas bien anecdótica del EI para con el personal policial y viceversa. No hay transferencia de técnicas, ni de métodos sistemáticos de diagnóstico jurídico. No se hace estudio de casos legales ni de actas, ni de jurisprudencia sobre la validez de la prueba, etc. Se tiene en cuenta el concepto de revictimización pero no se logra evitarla.

En cuanto al desarrollo de la prueba que se produce en judiciales, en los sumarios ya iniciado, generalmente testimoniales, no hay intercambio tampoco por lo que no existe una mejora en cuanto a la validez de la misma y su eficacia. Tampoco a este respecto se mencionó análisis de jurisprudencia que sirva de orientador.

En cuanto a las pericias, en su mayoría no se realizan en el ámbito de la comisaría, sino que son ordenadas por las oficiales de acuerdo al pedido de las UFI –en las visitas se observó gran delegación de tareas judiciales en cabeza de las Crías.- En este sentido tampoco se comentó nada de su validez en relación al ppio. de legalidad y la facultad de control de la producción de la prueba.

Observaciones: Se advierte cierta distancia entre el EA y el resto del personal de la Cría de la Mujer y la Familia que probablemente se vincule con que el EA depende de la DGPG. Una de las formas de acercar la DGPG a la percepción del personal policial podría ser que el EI, les brindara talleres, charlas, ó mesas de trabajo coordinados desde la dirección. En éste intercambio las experiencias de unos serían conocidas por los otros lo que favorecería, enormemente, la atención mas adecuada de las víctimas. Sin embargo debería tenerse especial cuidado en no recargar esta tarea a la habitual de las/os oficiales de la CMyF que de por sí ya es mucha.

Esta relación evitaría, además, la violencia institucional que sufren las víctimas/sobrevivientes que de manera múltiple se encuentran con el EI y luego con el personal policial y así sucesivamente. También permitiría que las/os oficiales de algún modo capitalicen la experiencia cotidiana, desarrollen sus inquietudes al exponerlas y se afirmen personalmente frente a las circunstancias de VF y VS.

Se podría en algún momento evitar la revictimización con la implementación adecuada de sistemas de información y de atención que compartirían el EI y el personal de la comisaría, también en forma coordinada.

2. Expedientes y exposiciones.

Conforme a lo que haya relatado la víctima, se decide si corresponde una denuncia penal (instando o no la acción penal) ó una exposición civil³. Al serles preguntados por esta distinción, en su mayoría, los abogados manifestaron, recomendar a las víctimas siempre la realización de denuncias frente a la posibilidad de las exposiciones. Sin embargo aclararon que son las víctimas quienes en muchas ocasiones no saben exactamente lo que quieren y que optan por hacer una exposición. En este sentido reconocieron dos factores para ellos determinantes para las consultantes, al momento de decidir entre una denuncia y una exposición, que son: la falta de respuesta judicial y la falta de independencia

³ Así lo expresado literalmente en el Protocolo de Procedimiento de Atención a la víctima – punto 4.3 “Tareas del sumariante. Violencia Familiar. Item 4.3.1.1.5. Sin embargo, en este desarrollo he de tener en cuenta la siguiente distinción: denuncia civil, denuncia penal y exposiciones. Tres formas distintas de atención jurídica de los casos de violencia familiar. En cuanto a las exposiciones, está en cuestión su utilización puesto que al ser únicamente un acto en el que se describe un estado de situación no produce efectos jurídicos mas que la sola constatación..

económica. De tal modo inciden estos factores en la situación post denuncia en que se encontrará la víctima/sobreviviente que al momento de asesorar, los abogados, se enfrentan a una situación de difícil resolución. La puesta en marcha del sistema judicial ó la separación de la víctima/sobreviviente de quien brinda el sustento económico de ella y sus hijos no le resulta en modo alguno indiferente a la víctima puesto que estará sola para enfrentarlos. Por ello, los abogados, sienten que recargan a las consultantes con esta realidad nuevamente violenta. Sin embargo, pese a estos dos factores negativos del sistema general de respuesta a la VF, impulsan se radiquen denuncias, sea tanto para la intervención por la ley de violencia familiar como para la justicia penal.

Una situación parecida se plantea en los casos de denuncias de delitos penales dependientes de instancia privada, puesto que al saber las víctimas que recae sobre ellas la responsabilidad de decidir si se investiga o no, temen por futuras represalias dentro de su familia y finalmente optan por considerar poco conveniente la intervención judicial. En este sentido, se distinguen de entre los abogados, quienes impulsan a la víctima a denunciar no obstante no instar la acción penal y quienes, si la denunciante no va instar la acción penal consideran mejor no radicar la denuncia. En el primer caso los abogados consideran que la intervención judicial, aunque mas no sea para recibir únicamente la denuncia, tiene un significado distinto para las víctimas y los victimarios.

Observaciones: Es de destacar el compromiso asumido por los abogados del EI en relación a la VF al rechazar casi en su totalidad, de plano, la posibilidad de confeccionar exposiciones en vez de denuncias – por VF ó penales-. En sus observaciones hicieron un análisis de género logrando ubicar a las víctimas/sobrevivientes en su verdadero contexto socio-económico descifrando su posición de dominadas y su carácter dependiente, datos a los que ofrecen como respuesta institucional desde las CMYF la radicación de denuncias. De este modo se logra la “visibilización” de la VF por el registro correspondiente de denuncias de VF ó penales en los registros estadísticos del Poder Judicial y se refuerza hacia la comunidad el valor “simbólico” del derecho al afirmar institucionalmente - por el hecho de la denuncia- que la VF es un delito, es juzgable, perseguible y sus autores podrían ser investigados y sancionados.

Con la radicación de la denuncia, la DGPG logra, a través de la implementación de los protocolos y de su política pública en las CMYF, hacerse presente en el ámbito del Poder Judicial, donde influye de los dos modos explicados arriba, es decir, haciendo visible la VF en su verdadera dimensión social y modificando los estadísticas judiciales.

A partir de esta nueva dimensión de la VF –judicial y social- se permitiría una aplicación mas amplia de programas de autoayuda, talleres, etc. que se coordinen desde la DGPG en la medida en que resulten posibles y adecuados al EI.

Vale una aclaración en éste punto y es que, al intervenir el Poder Judicial, a través de la denuncia, las agentes de la CMYF pasan a ser auxiliares de la justicia, lo que resulta sumamente importante en los casos en que el victimario pertenece a alguna institución gubernamental ó es de cierto nivel económico. Aquí es la judicatura la que adopta las decisiones concernientes a las víctimas/sobrevivientes

ó el victimario y dispone del aparato coercitivo estatal en caso de que lo necesite. Si hubiese incumplimientos ó desobediencias a sus mandatos, éstas podrían ser penadas. Esta coerción permite un dominio distinto de la situación de VF y una protección mas adecuada a las víctimas frente a victimarios que trabajen dentro del sistema estatal.

c. De la víctima/sobreviviente.

1. Descripción y caracterización según su percepción.

Al interrogar sobre las personas víctimas, los abogados señalaron que en su mayoría son mujeres. Algunas concurrían a denunciar VF sufrida por otras personas –generalmente hijas/os- u otro familiar. Sin embargo, las denunciadas también son percibidas como víctimas. No se las nombra como mujeres. Se las definió como personas indecisas y con necesidad de contención. En general se habla de la necesidad de “protección” que tienen las mujeres habiéndose observado que en muchos casos los abogados hablaban de darles instrucciones o indicaciones que ellas debían seguir.

Algunos manifiestan que los menores son los que sufren más VF.

“lo judicializamos porque vemos que entre ellos no lo pueden solucionar, entonces , teniendo en cuenta otra cosa muy importante que es el riesgo de los menores que sufren... yo diría cien veces mas que la mujer”

Hubo el caso de abogados del EI que manifestaron haber atendido a varones. En éstas situaciones algunos de los casos fueron encuadrados como Violencia familia -ley 12569-. También se mencionó que hubo varones que concurrieron porque querían asesoramiento legal por trámites como regímenes de visitas ó alimentos, etc. Pese a no revestir el carácter de víctimas de VF fueron atendidos y asesorados legalmente. No se mencionó una situación igual en el caso de una mujer, es decir que hubiese concurrido únicamente para ser asesorada, a sabiendas de no ser víctima de VF.

Ha habido asesoramiento legal a los victimarios que concurrieron a la CMyF anoticiados de la denuncia por VF.

“mire lo van a notificar del art. 60... o lo que usted tiene es una restricción del hogar... y en éstos términos, de ésta forma usted puede dirigirse al tribunal que tomó la medida y puede presentar... porque todos tenemos el derecho de defensa, puede presentar pruebas ... por la vía ordinaria... como sea...”

Los abogados han expuesto que las víctimas, luego de la primer visita que generalmente se vincula con un primer acercamiento a la CMyF y a la temática de la VF, vuelven varias veces mas. Los motivos son variados y en general pueden señalarse como episodios de violencia reiterados, la tramitación de un expediente judicial en el que deben realizar alguna medida en la comisaría -Exclusiones, etc.-, el pedido de nuevo asesoramiento sobre divorcios, alimentos, etc.. Los abogados no llevan un registro de estas visitas, por lo que no está contabilizada la cantidad promedio de visitas reiteradas.

Manifestaron, en relación al registro de cada víctima que, al conocerlas personalmente y tener un trato directo con ellas, recuerdan cada caso en particular y la situación en la que se encuentran legalmente sin necesidad de recurrir a ningún legajo ó archivo. Por ello no llevan un registro de las personas que asesoran.

La mayoría de los abogados dijeron que no han observado un patrón que indique que las víctimas iniciarán un trámite de exposición civil, luego radicarán una denuncia de violencia familiar y finalmente una causa penal. Puede ocurrir cualquiera de éstas circunstancias de modo indistinto y en reiteradas oportunidades. Es decir que no se ha fijado un patrón de conducta en relación a la VF en el marco de las CMF por parte de las víctimas/sobrevivientes.-

Observaciones: Debido a que la VF es una forma de violencia de género, existe la errónea percepción de que la VF es una especie de “fenómeno” que excede a los integrantes de la familia, que no tiene un agente provocador directo. Se considera desde cierta óptica jurídica que la familia toda sufre VF y no se distingue concretamente al/la causante de esta situación en las relaciones familiares (el mito de la mutua agresión o la culpabilidad de la víctima). De este modo se invisibiliza tanto a las víctimas directas de la violencia familiar como a los/as victimarios/as que no aparecen como actores directos de la agresión sino como efecto de ese contexto de VF. De aquí se deriva el hecho de que se dé al victimario el mismo trato que a la víctima en la atención del EI. Para evitar esta confusión sería recomendable reforzar el concepto jurídico de sujetos pasivos y activos que se involucran tanto en la ley de VF, como aquellos que se definen en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Otro punto importante a establecer frente al análisis normativo de la situación de VF es que no es un “fenómeno” social ajeno e independiente a los individuos que componen las familias. La VF (como todos los actos de violencia sea cual fuere el contexto) siempre tiene un/a responsable, un/a autor/a -en términos de derecho civil y penal-. Tener en cuenta que éste autor/a está inmerso/a en un contexto social determinado no es lo mismo que afirmar que son el “producto inevitable” de ese contexto social. Si el análisis contextual va a derivar en una afirmación que evita ó impide la responsabilización de los autores y el ejercicio restrictivo de derechos por parte de las víctimas se transforma inmediatamente en un análisis discriminatorio afectando el acceso a la justicia y la igualdad de trato legal.

En este punto de análisis se observó con extrañeza que, sin embargo, sí se tiene claramente identificada a la “autora”, a la mujer violenta, cuando se trata de víctimas niños/as, ancianos/as y que no se piensa de ella en iguales términos de “producto inevitable” del contexto social, como antes detallábamos de los varones.

Otro punto interesante es la descripción sobre la forma diferenciada que toman el acercamiento de la mujer y del varón a las CMF. De lo expuesto por lo abogados se desprende que quienes no tienen temor alguno de acercarse a las estructuras institucionales -aunque estas sean experiencias novedosas-, son los varones. Confían en que serán atendidos, cosa que así ocurrió -aún cuando legalmente era pertinente-, y no se los derivó a otra comisaría ni a una asesoría

jurídica gratuita como ocurre habitualmente en el caso de las mujeres frente a la mínima duda sobre competencia ó jurisdicción. Frente a esta realidad en cuanto al perfil de la víctima y la distinción de trato, no existe por parte de los abogados del EI un juicio crítico en perspectiva de género, sino mas bien una reafirmación legal de los derechos de los imputados (en general varones). Para no realizar un trato nuevamente discriminatorio se recomendaría la reafirmación de que la atención de VF debe prevalecer frente a los asesoramientos de otros temas generales –como los de familia- y que el asesoramiento a los imputados no debe ser evacuado en modo alguno por los abogados del EI –para eso está el defensor oficial ó las asesorías jurídicas gratuitas que sí son obligatorias para los imputados-. Por eso hay que tener muy presente cuando se produce el acercamiento de las mujeres al EI que no se sienten cómodas en el ámbito institucional y que el trato será exclusivo para las víctimas –evitando el temor de que luego podrían asesorar a su marido/pareja-.

Teniendo en cuenta que con las reiteradas concurrencias a las CMyF, las víctimas/sobrevivientes se enfrentan a problemas como las distancias, los tiempos de espera, la atención en las guardias, etc., faltaría establecer una estrategia de atención que tienda a impedir las reiteradas visitas de las víctimas/sobrevivientes a las CMyF, de modo que estas visitas se reduzcan a los casos estrictamente necesarios para las víctimas.

2. Atención y abordaje de casos.

En la entrevista los abogados, la mayoría de las veces, dejan que la persona hable, escuchan lo que les quieren decir. De este modo “va saliendo” la situación concreta por la que se consulta así como su contexto histórico. Manifestaron que el tiempo de escucha es prolongado y a veces los relatos son desordenado. En algunas ocasiones consideran necesario guiar a las víctimas para conocer mejor su situación jurídica.

“.. se le da un panorama amplio de lo que es la ley, o sea.., evidentemente, tal vez escuche información , de golpe , para un persona que no tenía conocimiento de derecho, pero bueno... se les da la información....”

“...tratamos de protegerla... vamos nosotros (los abogados) y hablamos con ella...”

Como paso siguiente, explicaron que sitúan a las víctimas legalmente, explicándoles sus derechos⁴ y las herramientas con las que cuentan para iniciar el proceso. Manifestaron que es importante que las víctimas decidan el trámite legal que van a iniciar en forma totalmente libre. No obstante la mayoría de los abogados reconoció que, muchas veces, estas no están en condiciones psicológicas adecuadas para decidir y que deben ser apoyadas por las/os psicólogas/os realizando terapia o concurriendo a talleres para reforzar su personalidad, lo que insume de bastante tiempo. Se plantea un gran problema frente a estas situaciones porque no siempre la víctima puede tomar una decisión en el momento en que es legalmente oportuno.

⁴ Este proceso no está estandarizado. Como se mencionó anteriormente, el EA no tiene especialización en VF o VS.

En general no toman en cuenta si el hecho ocurre “intramuros ó extramuros” puesto que se vincularía con un tema netamente probatorio, agregando que por la especial índole del conflicto de que se trata, éste en la mayoría de los casos ocurre “intramuros”. Esto le quita relevancia al dato mencionado.

“... que sea dentro de la casa o que sea fuera de la casa siempre es igual para la ley..”

En relación a los formularios de entrevista propuestos por los protocolos, la mayoría de los abogados reconoció que los datos allí contenidos son de suma utilidad y que podrían ser incorporados a la denuncia para mejorarla. También manifestaron que resultan útiles al momento de encuadrar las situaciones particulares dentro de las definiciones de violencia familiar de la ley. No obstante señalaron que son muy extensos y que podrían abreviarse la cantidad de datos.

Cuando hay menores de edad involucrados, el personal de la comisaría, debe dar inmediata intervención a los Juzgados de menores. En estos casos los abogados del Equipo interdisciplinario no intervienen porque, al igual que en los casos de abusos, toma conocimiento el juzgado de menores de turno. Solo conocen éstas circunstancias cuando son parte de un episodio antiguo relatado en una situación actual que no es de abuso.

Observaciones: Especialmente a partir del manejo de la información y la conducción de la situación jurídica de la víctima se reproduce el rol protector del varón de la familia, en el abogado del EI al momento de asesorar a las víctimas/sobrevivientes. Los juicios sobre las actitudes dentro de la familia que toman las mujeres suelen ser muy severos. La forma de evitar este tipo de atención es hacerse conciente de lo que significa el sexismo y tratar de trabajarlo en conjunto para evitarlo⁵. En este sentido es de suma importancia reiterar que la toma de datos estadísticos y la confección de informes permitiría delimitar esa función de protección. También resultaría útil trabajar sobre la terminología de “paternidad responsable” que permite replantearse ciertos roles en la familia y sus consiguientes responsabilidades dentro del hogar.

Lo relevante de éste proceso es que se ha logrado incorporar “el escuchar” como circunstancia determinante de la buena realización de la entrevista. Es de destacar que se toma como válidas las expresiones de la víctima, evitando la duda sobre los hechos que relata. En este sentido se ha progresado al evitar realizar entrevistas basadas únicamente en la fase probatoria de los casos posibilitando la incorporación de hecho no probados como reales. Aunque el dato de la prueba jurídicamente válida, siga siendo de suma importancia, no es ya determinante de una acción.

⁵ Paso 6, en los seis pasos de análisis propuestos por Alda Facio en “Metodología para el análisis de género del fenómeno legal” idem anterior.

3. Expectativas personales frente a las víctimas/sobrevivientes

Como objetivo final de su trabajo los abogados manifestaron haberse propuesto que la víctima “salga” de la situación de violencia. Consideran que la Violencia Familiar no es claramente percibida por las víctimas/sobrevivientes puesto que están inmersas en ella. También expresaron que frente a esta invisibilidad de la VF por parte de las propias víctimas lo importante es mostrarles que no es natural el maltrato. Reconocieron todos los abogados que es necesario transitar un largo camino compuesto de pequeños objetivos perseguibles a corto plazo, (como por ejemplo la exclusión del hogar, la presentación de la denuncia) y luego objetivo a mediano y largo plazo (como por ejemplo los tratamientos psicológicos, afianzamiento económico. etc.). Los abogados han expuesto que estas superaciones personales de las víctimas son un logro para su trabajo y les produce gran satisfacción. Lo experimentan como una batalla ganada y se sienten parte de éste proceso. Se involucran personalmente en algunos de estos procesos.

Hubo algunos de los entrevistados que manifestaron que como parte de los objetivos está el hecho de que las partes involucradas eviten la violencia refiriéndose tanto a la víctima/sobreviviente como al victimario. Manifestaron que en algunas oportunidades habían concurrido las mujeres a denunciar y detrás de ellas los varones intentándose inmediatamente conciliar a las partes. Mediar entre ellos.

“... se trata de mediar, se trata de buscar una solución alternativa. No somos mediadores pero.. de pronto... lo que hace el EI es atender en forma independiente y autónoma a cada una de las víctimas y buscamos si hay posibilidad, de que por lo menos cese la violencia. No hacemos mediación ..., sino que tratamos de establecer un diálogo tanto con la víctima como... digamos.. entre comillas... el imputado ”

En cambio hubo otros abogados del EI que indefectiblemente niegan la mediación como posibilidad jurídica válida en VF.

“En el caso de violencia familiar, mi criterio es que el sistema de mediación no funciona, sino que es judicializable el caso y debe llevarse con todos los antecedentes que se logren recolectar a conocimiento del juez...”

Observaciones: En la ley de VF no se prevé audiencia de mediación alguna. De hecho existe una oposición muy fuerte desde la doctrina jurídica y de resolución alternativa de conflictos en éste tema. La imposición de mediación tanto en la rama de familia como en el derecho penal que se relacione con la temática de violencia de género y VF se identifica con prácticas discriminadoras contrarias a los tratados internacionales de derechos humanos de las mujeres⁶.

En cuanto a los demás objetivos que se proponen los abogados, se nota un proceso de identificación personal con aquel iniciado por la víctima desde el que

⁶ Se vincula la mediación con la resolución alternativa de conflictos en el ámbito de las reformas judiciales y la modernización de la justicia. La excepción a éstas posibles implementaciones es la mediación en la violencia familiar. Ver Luz Rioseco Ortega en “Mediación en Casos de Violencia Familiar” en “Genero y Derecho”.

se comienza a comprender el problema que enfrentan las mujeres en toda su complejidad. Esto permite, a nivel de política de gestión, fijar metas a largo plazo y un desarrollo de objetivos parciales mas o menos claros. Si bien esta toma de postura parte de la identificación entre víctima y abogado, resulta útil al momento de buscar logros concretos produciendo por momentos que los abogados puedan reconocer los espacios de los varones y hacer un análisis crítico desde su experiencia. Cuanto se percibe como meta posible la desaparición de las situaciones de violencia familiar que la víctima padecen, se produce una puesta al servicio de la profesión y los conocimientos de los abogados.

d. De la comunidad

1. Percepción de las necesidades de la comunidad en relación a la VF

Los abogados han advertido que trabajan con poblaciones en las que existe la necesidad primaria de ordenar las situaciones legales familiares (divorcios, alimentos, régimen de visitas, un varón cabeza de dos familias simultáneamente, etc.), puesto que la ausencia de estas regularizaciones impide muchas veces el pleno goce de los derechos que se quieren hacer valer. De esta necesidad estructural de la comunidad surge para los abogados del EI, la de asesorar para la “reestructuración familiar”. Algunos abogados del EI han expuesto esta forma de tratamiento a la temática de VF como un modo de prevenir problemas de VF posteriores. Intentan prever inconvenientes ulteriores basados en el desarreglo legal de las familias y evitarlos planteando un cauce legal.

Se identifica como una función preventiva esencial, la enseñanza. Los abogados hablan de actividad docente y del dictado de cursos y jornadas a la sociedad en general. En algunos momentos hablaron de las actividades docentes que ya realizan y en otros de la necesidad de hacer cursos y talleres para la sociedad en general.

Se expresó como parte de la complejidad de la temática que en ciertos partidos de la Provincia de Buenos Aires, hay comunidades de otras nacionalidades. Estas comunidades tienen su propia cultura y prácticas que en muchos casos dificultan la aplicación de la ley de VF porque no se integran con otras comunidades.

“Se casan entre ellos, ... es muy difícil, desgraciadamente a realizar en el contexto en que ellos viven, nuestra situación de poder ayudarlos en cuanto a la violencia familiar”

“la mujer es brutalmente sometida”

“... nos dice que la madre la había cambiado a ella con el agresor, por un terreno ”

Observaciones: La función de “prevención” que realiza el EI no abarca las tres etapas que define el protocolo de Organización y funcionamiento del EI . Existe una inclinación fuerte a trabajar sobre el nivel de prevención “primaria”, concretamente en lo relativo a la promoción de derechos. No se ha determinado

modo alguno de trabajar sobre la desnaturalización de la violencia y el cuestionamiento del sistema patriarcal.

En cuanto a la prevención “Secundaria” se ha notado cierto inconveniente al momento de definir claramente el “factor riesgo”. Sí ha sido relevante el reconocimiento como uno de los factores de riesgo mas vinculantes de la VF, la dependencia económica de las víctimas. Sin embargo no se supera este estadio de análisis y no se llega a un diagnóstico de la víctima en situación de riesgo. Tampoco esta muy claro como hacer ésta prevención secundaria. Aquí, conforme el texto del protocolo, se permitiría la “intervención” de la CMYF si se detectara el “factor riesgo” en alguna de las personas que concurren ó se acercan y aún no son víctimas/sobrevivientes de la VF. Pero no se ha pensado de que modo llevar adelante esa “intervención” del EI, si aún no hay causales de VF conforme la definición legal.

En cuanto a la prevención “Terciaria” se actúa sobre el problema en base a datos de la “experiencia” personal, sin tener realizado un diagnóstico ni una posible evaluación de secuelas sobre esta forma de trato jurídico del problema concreto de cada víctima. Fundamental importancia tiene aquí la coordinación con el Poder Judicial y la Sociedad Civil para un abordaje integral de la prevención terciaria. Existe con éstos dos sectores sociales una comunicación no muy fluída con la que no se ha logrado una cooperación estable.

2. Salida a la comunidad del EI y de las CMYF

2.1. Grupos de apoyo.

Desde la perspectiva de los abogados entrevistados, uno de los puntos que le ha dado mayor visibilidad al EI dentro de las comisarías de la mujer y la Familia y aquello que permitió crear un espacio social de pertenencia de las víctimas son los grupos de apoyo.

“ ... el trabajo de gabinete aclaró muchas dudas con respecto a las formas en que la gente percibía la violencia, y se esta dando cuenta... ya va con la conciencia de lo que es violencia, también. Porque hay gente que directamente pensaba que un cachetazo era lo normal.. u otra gente pensaba que si le pagaba... ‘algo habrá hecho’”.

No en todas las comisarías están realizándose grupos de apoyo a las víctimas. Para los abogados es un punto importante dentro de la problemática considerando relevante llevar adelante estos grupos. También les pareció fundamental en relación a la tarea que emprenden judicialmente puesto que es necesario que se fortalezcan los lazos afectivos de las víctimas y que se le brinde un entorno de confianza para obtener logros administrativos que dependen del impulso de la víctima.

Manifestaron quienes participaban de los grupos de apoyo que la recepción de información era mas sencilla en las personas que ya habían participado de estos grupos. También mencionaron que los lazos de solidaridad entre víctimas se reforzaban y que empezaban a entender que lo que vivían no era algo natural, que

era un problema compartido y que para superarlo era importante contar con apoyo, también el apoyo legal. Sirve como herramienta para ingresar al espacio jurídico con la conciencia de la necesidad de organización familiar.

2.2. Charlas de concientización, enseñanza.

Muchos de los abogados de los equipos interdisciplinarios, enseñan en colegios y en universidades, participan en charlas y debates ó pertenecen a organizaciones de juristas y de derechos. Por esta circunstancia muchos son fervientes defensores de la enseñanza de los derechos de las mujeres como punto fundamental para las correctas prácticas sociales. Hablaron de una población con escasos recursos económicos y poca educación primaria a la que no obstante la ven con ansias de aprender. Sin la enseñanza no puede haber conciencia del problema de la violencia en las poblaciones con las que trabajan. En este sentido, muchos transmitieron su inquietud en cuanto a la falta de espacios donde efectuar charlas y tareas de enseñanza. Quieren hacerlo y les parece que cuesta organizarlo.

También observaron como un punto favorable la salida a la comunidad por esta vía en la que no hay una limitación de la relación vinculada con un rol dentro de un espacio institucional.

3. Organización de la red

Pese a que los abogados conocen que deben organizar la red social de conformidad a lo que les ordena el protocolo, el vínculo que mantienen es con espacios jurídicos. Manifestaron no conocer otras organizaciones que no sean gubernamentales, agregando que muchas de las gubernamentales –como hospitales, hogares, etc.- tienen graves problemas estructurales. Sin embargo no pueden aportar información alguna sobre redes ya existentes de atención al problema de la violencia familiar.

Observaciones: Tanto los grupos de apoyo, las charlas de concientización, la enseñanza y el intercambio con la red son formas de relación cuya dinámica permite el conocimiento de experiencias desde todas las perspectivas posibles, es decir desde los casos particulares, hasta los judicializados, la mirada de la red, la vivencia de las oficiales de la policía, etc. Estas actividades visibilizan mucho las CMyF y al EI dentro de ellas. También permiten un acercamiento basado en la intención de aprender y no únicamente en la necesidad de denunciar.

Sin embargo el inconveniente que se advierte de éstas actividades, es su organización en general. Si bien los grupos de apoyo son mas fácilmente organizados por las/os participantes del EI en forma autónoma –para coordinar horarios, tareas de los grupos, etc. -, lo recomendable sería que los talleres, las charlas y especialmente la organización de la red estuviese a cargo de la DGPG directamente. Esta sería una forma de reafirmar su política tanto en los EI como en las CMyF, tomando un lugar preponderante en el sector social.

III. Relación con el Poder Judicial

a. Ley de violencia familiar/ figuras penales: abusos

1. Cruce de ambas. Hacia un abordaje integral.

Al entrevistar a los abogados del EI, estos delimitaron perfectamente la diferencia entre situaciones de violencia familiar que no contienen en sí un delito y aquellas situaciones que sí son delictivas. Algunos de los entrevistados han explicado de que modo se presentan las situaciones de entrecruzamiento entre el sistema civil y el penal, pero en algunos casos cuesta identificar la violencia de género que subyace en algunas situaciones aparentemente comunes, dándole prioridad a una u otra forma de atención legal.

Más se complica aún la situación ante las figuras penales dependientes de instancia privada (lesiones leves dolosas, violación, etc.) en las que la víctima, en general opta por no denunciar. Estos delitos son canalizados vía violencia familiar ante los tribunales de familia, siempre y cuando, nuevamente la víctima quiera asumir el esfuerzo. En muchas de estas situaciones las víctimas no están íntegras, es decir no están en condiciones de decidir y esto plantea graves interrogantes a los abogados del EI.

En estos casos los abogados tienden a responder recomendando una u otra de las acciones, es decir, la acción penal o la civil. Cuando interviene la justicia penal el EI queda desplazado de la atención a la víctima, interviniendo directamente el sistema judicial. En cambio cuando se denuncia por violencia familiar, es más factible que el EI siga interviniendo en la atención a la víctima dentro de la comisaría a través de los grupos y la asistencia a talleres. En casos como estos, donde se prioriza la intervención penal, la víctima/sobreviviente muchas veces está privada de acceder a los talleres o grupos de autoayuda, etc. porque no hay intervención alguna por V.F.

Observaciones: Es recomendable plantear de que modo el EI todo, podría intervenir cuando inmediatamente la justicia penal toma un caso. Podrían por ejemplo ser presentados informes periciales o informes situacionales teniendo en cuenta la especial orientación y formación del EI. Así en cada causa penal donde hubiese una víctima mujer podría existir un dictamen del EI en el que conste si hay o no VF y si es recomendable también el tratamiento desde esta perspectiva. Por ejemplo: no es lo mismo una violación ocasional en un barrio determinado, que una violación donde además se verifique algún lazo de parentesco, la relación de dominación de una de las partes sobre otra, la dependencia económica, el mal trato cotidiano, la ausencia de responsabilidad paterna, etc. También de este modo se reforzaría la presencia de las CMF en el sistema judicial y se tendería a la especialización en la atención de casos cuyo origen sea la violencia familiar. Finalmente se lograría la mejor coordinación entre sistema Penal y sistema Civil en la toma de las denuncias de modo que una acción de una índole no excluya necesariamente a la otra y el problema sea abordado integralmente. En la mayoría de los supuestos de delitos penales donde las mujeres son víctimas hay violencia de género.

2. Respuesta judicial.

Al entrevistar a los abogados del EI, éstos desarrollaron una descripción del sistema judicial que incluía el estado de colapso de la justicia, la falta de respuesta especializada en los casos de violencia familiar y una especial atención en los sistemas probatorios. Estos puntos se reconocieron como debilidades ó trabas estructurales del sistema judicial ante el problema de la VF. La respuesta de los abogados frente a ellos es de resignación, como de un estado de situación inmodificable.

También manifestaron sentir cierto grado de frustración cuando, a pesar del estado de situación mencionado las víctimas/sobrevivientes ponen en funcionamiento las estructuras judiciales y luego de un tiempo abandonan la instancia, cediendo lugares ya ganados y cediendo frente al victimario.

Observaciones: Este modo de percibir el sistema judicial se expresa en dos sentidos dentro de los abogados del EI. Por un lado se inicia la relación con el sistema de justicia caracterizándolo como un sistema incapaz concreta y realmente de dar respuesta a las víctimas/sobrevivientes. Por otro lado se detecta, por parte de los abogados, cierta preocupación al involucrar a la víctima en ese sistema sabiendo el esfuerzo extra que deberá realizar para superar esas limitaciones estructurales. Ante esta falta de respuesta judicial entendida en estos dos sentidos, en general, los abogados del EI, intentan evitar recargar las Unidades Funcionales de Investigación, los juzgados, etc. Igual solución encuentran frente a las víctimas al pensarlas actoras judiciales con el consiguiente esfuerzo que ello significa. Todo ello deriva en que, por un motivo u otro se recomienda no ingresar al sistema judicial. Algunos abogados de los EI anticipándose a los resultados de la intervención judicial y a sabiendas de la falta de respuesta de ese sistema al momento de orientar a la víctima obtienen como resultado que éstas resuelvan desistir de realizar la denuncia aumentando así la cantidad de exposiciones realizadas.

Pese a esta tendencia de no judicialización de casos por falta de respuesta, los abogados han expuesto en el contexto de las entrevistas, el valor simbólico que tiene el derecho a través de la intervención judicial tanto para las víctimas de violencia familiar como para los victimarios. Por lo tanto, pese a que no habrá respuesta del aparato judicial, sí es importante aunque mas no sea el pedido de intervención judicial que hagan las víctimas/sobrevivientes, puesto que ese solo acto ya significa una definición de VF en términos legales y una inmiscución del derecho con un efecto simbólico en los participantes de la relación familiar.

A los fines de iniciar un registro estadístico y de toma de conciencia por parte de los juzgados y Unidades Funcionales de lo que significa la VF y de todas sus repercusiones y formas de expresión es recomendable denunciar los casos de VF –aunque luego se archiven sin resolución alguna- lo que podría determinar que con el tiempo se comience a darle prioridad a estos casos y se perfeccione el sistema probatorio.

Como efectos secundarios, pero de una importancia cabal en ésta problemática, de éstas dos ideas regentes del vínculo CMyF – PJ, obtendríamos en primer lugar la idea de independencia de las Comisaría respecto al poder judicial de modo que el prever una resolución adversa judicialmente no implique la ausencia de denuncias o la disminución de pedidos de medidas cautelares de las víctimas y el registro de estadísticas judiciales que se vería de algún modo transformado ante el aumento de denuncias de índole penal.

IV. Recomendaciones

- *Es necesario que los integrantes del EI se especialicen en el abordaje y los nuevos instrumentos internacionales sobre violencia contra las mujeres apoyandose en las recomendaciones de las comisiones correspondientes con el fin de conocer, además, las responsabilidades asumidas por el Estado vinculadas con violencia en general y en particular con la violencia hacia las mujeres.*
- *Fomentar la coordinación de los EI y su inclusión de profesionales que no solo sean del derecho y, de ser posible, en mujeres, en especial en el EA dónde no hay mujeres. También es necesario separar las responsabilidades y funciones de los miembros del EI de acuerdo a su especialidad y su papel dentro del proceso de atención.*
- *Mejorar el registro que los EA hacen de los casos, fomentando la confección de la “Entrevista Unica de Admisión”, “Diagnóstico Situacional”, “Informe de Trabajo” , “Informe Testigo de Caso” y de cualquier otro documento, cuyo análisis posterior sea de utilidad para plantear políticas publicas desde la DGPG. Falta la creación de una metodología de impacto sobre la tarea realizada.*
- *Recomendar la intervención judicial frente a la VF en todos los casos o en la mayor cantidad de casos posibles a los fines de fortalecer la imagen de la DGPG y las CMyF en general como receptoras de denuncias sobre VF. Influir de este modo en la especialización de los EI en VF de modo que sean un referente en materia probatoria. Finalmente con la intervención judicial se buscará lograr el registro estadístico mas cierto posible de VF y la creación de jurisprudencia relacionada con la temática.*
- *Establecer una coordinación externa al EI para la organización de la red entre instituciones externas a las CMyF, sean Ogs u Ongs. para reforzar el vínculo DGPG-EI, lograr visibilidad de las CMyF y una mejor coordinación zonal.*